



República de Colombia



Sala Cuarta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL - **SENTENCIA**
RADICACIÓN. 05001 31 05 **015 2020 00420** 01
DEMANDANTE: ELKIN DARÍO VERGARA TIRADO
DEMANDADO: MEGA MONTAJES Y SOLUCIONES SAS

Medellín, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 9 de junio de 2022, por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Pretende el demandante que se declare que entre las partes existieron 2 contratos de trabajo por obra o labor vigentes entre el 15 de enero y el 20 de diciembre de 2019 y desde el 7 de enero hasta el 20 de agosto de 2020, los cuales finalizaron por terminación de las obras; en consecuencia, se condene a la demandada al pago de las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones y la indemnización moratoria, todos estos conceptos causados para cada uno de los contratos suscritos (págs. 4, 5 arch. 1 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que se vinculó a trabajar con la demandada mediante un contrato por obra o labor contratada el 15 de enero de 2019 para desempeñarse como Instalador devengando 1 SMLMV hasta

el 20 de diciembre de esa anualidad, sin embargo, durante el tiempo que se ejecutó el vínculo la empleadora no le pagó las acreencias laborales aquí reclamadas; nuevamente ingresó a laborar el 7 de enero de 2020 vinculado mediante un contrato similar, para el mismo cargo y con igual sueldo hasta el 20 de agosto siguiente, tiempo durante el cual tampoco le fueron canceladas sus prestaciones (págs. 3,4 arch. 1 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 8 de febrero de 2021 se admitió la demanda y se ordenó la notificación y traslado a la demandada (arch. 2 C01), quien contestó con oposición bajo el argumento de que al demandante se le cancelaron todos los conceptos correspondientes al pago de prestaciones sociales y para tal efecto se firmó un contrato transaccional y/o paz y salvo entre las partes el 7 de enero de 2020; adicional a ello se le solicitó autorización a un juzgado laboral del circuito de Medellín para efectuar la consignación de las acreencias, dado que el demandante no suministró información acerca de su número de cuenta, ni se acercó a recibir el pago de las primas de servicios a que tenía derecho durante el segundo contrato de trabajo. Propuso como excepciones de fondo las que denominó pago, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido (págs. 1-4 arch. 3 C01).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el 9 de junio de 2022, profirió sentencia en la que declaró que entre las partes existieron 2 contratos de trabajo por obra y/o labor, vigentes entre el 15 de enero y el 20 de diciembre de 2019 y desde el 7 de enero hasta el 20 de agosto de 2020, tiempo en el que el demandante se desempeñó como Instalador y devengó 1 SMLMV; declaró parcialmente próspera la excepción de pago respecto de las acreencias y/o prestaciones sociales atinentes al segundo contrato de trabajo, por ende, absolvió a la demandada del pago de las acreencias reclamadas frente a este vínculo; condenó a la demandada al pago de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones causadas en el primer contrato, más la indemnización moratoria del art. 65 del CST en cuantía de \$24.291.402,67 liquidada entre el 21 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2022 y a partir del 1º de junio de 2022 se deberá cancelar un día de salario (\$27.603) por cada día de retardo en el pago de las prestaciones hasta que se pague efectivamente, e

impuso costas a su cargo.

Para lo que interesa a la alzada, motivó la decisión en que, si bien se allegó la liquidación de las prestaciones sociales del contrato atinente al año 2019, lo cierto es que no se aportó el comprobante de pago efectivo de la misma una vez finalizado ese vínculo, como sí ocurrió con la liquidación del segundo contrato de trabajo ejecutado en el año 2020 a lo que se añade que el demandante en el interrogatorio de parte manifestó que la firma impuesta en el paz y salvo no era suya, mientras que la liquidación del año 2020 sí ingresó a su patrimonio. Condenó a la indemnización moratoria del primer contrato de trabajo, dado que no se adjuntaron los comprobantes de pago correspondientes ni la solicitud que elevó la demandada al juzgado para consignarle al demandante la liquidación de las prestaciones sociales (archs. 7, 8 C01).

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La **demandada** señaló que no está de acuerdo con la decisión tomada por la *a quo* porque se omitió valorar el documento allegado como prueba suscrito por el demandante el 7 de enero de 2021 [*sic*] que no fue tachado de falso en el momento oportuno, aunado a que él actuó de mala fe porque luego de haber recibido una suma de dinero como pago de las prestaciones sociales del año 2019, continuó trabajando con la organización durante el año siguiente, de ahí que no se le adeudaba nada al momento de suscribir el nuevo contrato; en consecuencia, tampoco es posible imponer la indemnización del art. 65 del CST.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 19 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, en proveído del 21 de noviembre de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar (archs. 2, 3 C02); sin embargo, guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A

del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si se valoraron de manera incorrecta las pruebas allegadas por la demandada, en especial el paz y salvo del 7 de enero de 2020, y si como consecuencia de ello, es posible tener por acreditado el pago mencionado por la demandada respecto de las acreencias laborales causadas para el contrato de trabajo suscrito entre las partes en el año 2019.

Según lo dispuesto en el art. 65 del CST y conforme lo ha establecido antaño la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la imposición de la indemnización moratoria no es de aplicación automática sino que se debe estudiar, en cada caso particular, la conducta remisa del empleador, para con ello establecer, si su obrar, al abstenerse de pagar en forma oportuna y completa los salarios y prestaciones sociales a la finalización del nexo contractual, está precedido o no de buena fe, por encontrarse justificado en motivos serios que, a pesar de no resultar jurídicamente acertados, sí pueden ser considerados como atendibles o razonables (CSJ sentencias SL12854-2016 y SL6119-2017).

En el presente caso, no está en discusión que existieron 2 contratos de trabajo por obra y/o labor conforme el art. 45 del CST: el primero, vigente entre el 15 de enero y el 20 de diciembre de 2019 y el segundo, del 7 de enero al 20 de agosto de 2020, ya que así se declaró por la *a quo*, obran los contratos de trabajo (págs. 19-25 arch. 1 C01), y no se elevó reparo alguno frente a la decisión de primera instancia.

Ahora, si bien el demandante adujo que frente a estos contratos no se efectuó en forma alguna al pago de las acreencias laborales que respecto de cada uno se habían causado en su favor, al ser una negación indefinida no es susceptible de prueba, correspondiéndole indefectiblemente la carga probatoria a la demandada de acreditar lo contrario, de acuerdo con las reglas generales de distribución de la carga de la prueba establecidas en el art. 167 del CGP, máxime cuando en su contestación afirmó que no le adeudaba ningún concepto laboral a su ex trabajador.

No obstante, en ningún yerro probatorio incurrió la *a quo* en la medida en que no se allegó un documento idóneo del cual se pueda constatar el pago efectivo de las acreencias laborales que causó el demandante para el primer contrato ejecutado en el año 2019, pues la única prueba que se aportó con la contestación a la demanda, es un paz y salvo con fecha aparente de elaboración del 7 de enero

de 2020, en donde se indicó que presuntamente el demandante como trabajador y la demandada como empleadora *«obrando de común acuerdo, hemos realizado el contrato de transacción y desistimiento y renunciamos o desistimos de manera libre y voluntaria a cualquier pretensión, demanda o reclamación futura, lo anterior porque se ha realizado el pago final de la liquidación de las prestaciones sociales por el tiempo laborado en la compañía Mega Montajes y Soluciones SAS con lo que certificamos quedar a paz y salvo por todo concepto laboral, generado durante el tiempo de servicio, como consecuencia de lo anterior, desisto [sic] de toda reclamación judicial o extrajudicial y ratifico [sic] la certificación de paz y salvo por todo concepto laboral, en cuanto al pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones propias de la relación contractual. La presente transacción se realiza entre las partes de manera libre y voluntaria sin ningún vicio en el consentimiento que afecte la presente»* (pág. 6 arch. 3 C01).

Como se observa, este documento no puede ser tenido válidamente como una aceptación expresa de un presunto pago efectuado al demandante, por cuanto carece de los criterios necesarios para poderse concebir como una verdadera transacción al tenor de lo dispuesto en el art. 15 del CST, dado que no contiene los extremos temporales del contrato que aparentemente se declara a paz y salvo y mucho menos, cuáles fueron los supuestos valores recibidos por Elkin Darío Vergara, ni por qué conceptos entendidos como derechos ciertos e indiscutibles causados por el trabajador en el año 2019.

Tampoco contiene una fecha precisa de elaboración, pues simplemente la fecha impresa en la esquina de la parte superior izquierda del escrito como «07/01/2020», es la de elaboración de la segunda versión del formato de paz y salvo para el proceso de gestión de talento humano, luego, de ninguna manera se puede tener como fecha de suscripción del documento del que, por demás, no fue admitida como suya por parte del demandante en su interrogatorio de parte, la firma y huella impuestas en el espacio correspondiente al trabajador; y, al margen por supuesto, de que no hubiera sido desconocido el documento al tenor de lo dispuesto por los arts. 269 y ss del CGP no se necesita llegar a mayores elucubraciones ni a una argumentación profunda para concluir a simple vista, que dicha firma es totalmente distinta a la que se constata en el poder otorgado por Elkin Vergara ante la Notaría 16 del Círculo de Medellín (págs. 9-11 arch. 1 C01).

Nótese además que, a pesar de haberse afirmado vehementemente en la contestación de la demanda (radicada el 23 de febrero de 2021 – pág. 1 arch. 3 C01) que las prestaciones sociales de ambos contratos habían sido pagadas totalmente al demandante, el 9 de junio de 2022, data de la celebración de la audiencia de que trata el art. 77 del CPTSS (archs. 6, 8 C01), se allegó por la demandada al correo institucional del juzgado cognoscente, un soporte de la consignación efectuada el 10 de marzo de 2021 a la cuenta de ahorros n.º 617-423729-27 de titularidad de Elkin Vergara en Bancolombia, por \$1.560.258 como pago de la liquidación de prestaciones sociales del segundo contrato ejecutado en el año 2020 (arch. 5 C01), monto que el demandante admitió en la misma diligencia como recibido en su cuenta, como único pago de sus acreencias laborales.

Por otra parte, a pesar de que la demandada afirmó haber solicitado a uno de los juzgados laborales del circuito de Medellín, la autorización para efectuar la consignación de las acreencias del segundo contrato, por aparentemente no tener información acerca del número de cuenta del extrabajador, no allegó como prueba ese supuesto documento y tampoco el presunto título de depósitos judiciales como para poder de allí colegir que en efecto, había honrado las obligaciones que como empleador la ley le impone frente a sus trabajadores.

Adicional a ello, a pesar de que entre minutos 29:39 a 30:05 del interrogatorio de parte (arch. 6 C01), el representante legal había afirmado que, del contrato del año 2019 no le habían liquidado las prestaciones sociales al demandante, luego de que la apoderada que lo acompañó en la audiencia le susurró algo inaudible para esta Sala y le ayudó para contestar la pregunta efectuada por la parte actora, entre minutos 30:07 y 31:09 señaló que sí se le había pagado “*ese contrato y el anterior también*” pero que no recordaba cuánto era el monto que se le había cancelado en efectivo para el año 2019, lo cual resulta contradictorio y alejado de la lógica temporal en la que se ejecutaron los 2 contratos que suscribieron las partes.

Así mismo, se contradijo el representante legal al informar inicialmente que la suma pagada por acreencias del año 2019 se encontraba indicada en el paz y salvo ya reseñado, pero posteriormente, cuando el apoderado del demandante le hizo ver que no se había incluido ninguna suma allí, simplemente contestó que no había prueba de ningún recibo dado que el monto se había pagado en dinero en efectivo en el sitio de trabajo teniendo como testigos al personal de la empresa;

sin embargo, no solicitó su declaración como prueba. También es importante traer a colación en este punto, que la jueza advirtió la ayuda que recibió el representante legal por parte de su apoderada para responder varias de las preguntas que la operadora judicial le hizo desde el minuto 33:35; y, como si fuera poco, la *a quo* requirió al representante legal para que allegara los contratos de trabajo firmados por el demandante y demás documentos que contuvieran la firma de este, empero tal requerimiento fue incumplido sin justificación alguna.

De manera que, la empleadora ha debido pagar las prestaciones sociales y salarios adeudados a la terminación de cada uno de los contratos y no esperar hasta que el demandante impetrara la demanda y la notificara, pues es la obligación legal que tienen toda clase de empleadores, sean personas naturales o jurídicas, frente a sus trabajadores; sin que el hecho de que se le hubiera girado el dinero de la liquidación del último contrato a través de su cuenta bancaria, exonere a la demandada de ese deber legal y mucho menos de la indemnización moratoria, pues precisamente solo lo atinente al segundo contrato lo pagó un poco más de 6 meses después de haberse causado los derechos y luego de haber contestado la demanda con argumentos no acordes a la realidad, mientras que lo concerniente al primer contrato quedó rezagado e insoluto.

Con ello se concluye que, el comportamiento que tuvo la demandada fue el de desconocer las acreencias del demandante, con argumentos que no se compadecen con la verdad real de los hechos e inaceptables por parte de esta Corporación ante el desarrollo del debate probatorio, circunstancias que evidencian que la conducta de la empleadora no fue la correcta. En ese sentido, no pueden considerarse atendibles o justificables los argumentos expuestos por la demandada por lo que se **confirmará** lo decidido en primera instancia.

Lo anterior, al margen de que la Sala se encuentre en desacuerdo o no con la forma en que la *a quo* liquidó la sanción moratoria frente al primer contrato celebrado entre las partes, por cuanto no puede correr este tipo de sanciones mientras se encuentra vigente una relación laboral, sino que su contabilización inicia a partir del día siguiente de la terminación del último vínculo laboral que las ató, al ser procedente este tipo de condena por una sola vez, sin que de la interpretación del art. 65 del CST se pueda colegir que se permite la imposición concurrente y acumulativa de sendas condenas por dicho concepto, de ahí que debe aplicarse evitando la duplicidad (CSJ SL 26 sep. 2006 rad. 27427, CSJ SL 22 jun. 2006 rad. 26923); sin embargo, ha de advertirse que este punto en

estricto sentido no fue objeto de apelación, sino únicamente la imposición como tal de la indemnización, que es el único tema que habilitó la competencia del Tribunal en virtud del principio de consonancia establecido en el art. 66A del CPTSS, razón por la cual no se puede modificar la decisión en otros aspectos (CSJ SL 17 abr. 2012 rad. 38671, CSJ 8 feb. 2011 rad. 38817).

Costas en la alzada a cargo de la recurrente, se fija como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 9 de junio de 2022 por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Costas en la alzada a cargo de la recurrente, se fija como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

TERCERO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

https://etbcj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EuQZfauno6JKrEw1dqSe02oBGaRIEVQC8ir7Cz7UU5OMkg?e=d4aua6

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle

Magistrada

Sala 017 Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9f9c52b214208ed0a04f89916cbd76102e579905dbd64b7fc53e6993809172b4**

Documento generado en 27/11/2023 03:27:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>